

# **Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.**

## **EXPOSICION DE MOTIVOS**

### **I**

La presente Ley da cumplimiento al Programa Nacional de Reformas del Reino de España de 2013, que prevé una nueva regulación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con el objetivo de modernizar el funcionamiento y gestión de estas entidades, reforzando los niveles de transparencia y eficiencia, y contribuyendo en mayor medida a la lucha contra el absentismo laboral injustificado y a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.

El sistema de la Seguridad Social dispensa la protección pública contemplada en el artículo 41 de la Constitución Española a través de entidades con la naturaleza de entidades de Derecho público dotadas de capacidad jurídica, y también a través de entidades privadas a quienes el Estado autoriza para ejercer determinadas funciones de tipo administrativo.

El ejercicio de estas funciones de naturaleza administrativa se realiza por determinadas entidades privadas por el interés cualificado que ostentan en la materia, reservándose el Estado las funciones de dirección y tutela de las funciones públicas delegadas.

Las entidades privadas autorizadas son empresas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social, hasta ahora denominadas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, que pasan a denominarse por la presente Ley como Mutuas de la Seguridad Social.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales se regulan en la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en el Capítulo VII del Título I, titulado "Gestión de la Seguridad Social", y dentro del mismo, en la Sección cuarta. La figura jurídica a la que responde la participación privada en la gestión de funciones públicas es la denominada colaboración en la gestión de la Seguridad Social.

Las Mutuas de la Seguridad Social se pueden definir como asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro cuyo objeto exclusivo es la colaboración en la gestión de la Seguridad Social y cuyo ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional.

La colaboración en la gestión se desarrolla en relación con varias prestaciones. Así se pueden citar en la actualidad las siguientes: gestión de las prestaciones económicas y de asistencia sanitaria derivada de las contingencias profesionales; realización de actividades de prevención de riesgos laborales de la Seguridad Social; gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes; gestión de la prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural; prestación por cuidado de menores afectados por cáncer o enfermedad grave; y gestión del cese de actividad de los trabajadores autónomos.

Para el desarrollo de la referida colaboración gestionan cuotas del sistema que periódicamente le son transferidas por la Tesorería General de la Seguridad Social. Para el mismo objeto tienen adscritos bienes inmuebles de la Seguridad Social, que están inscritos a nombre de dicho Servicio como de la Administración de la Seguridad Social, como titular del patrimonio único de la misma.

Igualmente, cuentan con un patrimonio histórico, afecto a dicho objeto, en el que se integran los recursos y bienes obtenidos en su anterior naturaleza de entidad aseguradora, y que tradicionalmente se ha venido utilizando para afrontar los supuestos de responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados.

La repercusión de la gestión en las diferentes prestaciones por parte de las mutuas de la Seguridad Social ha sido positiva para el sistema, incluso en periodos de crisis, donde estas han sido capaces de generar excedentes y aportar importantes recursos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Sin embargo, la normativa vigente requiere una adaptación a la realidad actual en aras a la consecución de los principios de seguridad jurídica, coordinación, eficacia, eficiencia, transparencia y competencia. Principios todos ellos que están siendo materializados de manera generalizada en la reforma de las Administraciones Públicas.

La presente Ley regula la naturaleza y funcionamiento de las Mutuas de la Seguridad Social, así como el contenido y forma de ejercicio de las funciones públicas delegadas en las mismas con el objetivo del refuerzo de los citados principios.

Se pretende profundizar en la colaboración en aquellos aspectos relativos a la gestión de la Seguridad Social, dotándolas de instrumentos que permitan mejorar la gestión de las distintas prestaciones de manera que revierta en beneficio de los trabajadores protegidos.

Se persigue, a su vez, que esa mejor atención permita reducir el absentismo laboral injustificado y, por tanto, mejorar la competitividad de las empresas y, consecuentemente, la de la economía en su conjunto.

## II

La presente Ley mantiene la naturaleza de las Mutuas de la Seguridad Social como entidades asociativas privadas colaboradoras en la gestión de la protección pública, que con tal naturaleza se establece en el artículo 41 de la Constitución Española.

La Ley tiene por finalidad regular en su integridad el régimen jurídico de las Mutuas de la Seguridad Social y de las funciones que desarrollan.

De esta manera, se pretende por un lado, cubrir las lagunas legales existentes y, por otro, integrar la dispersión de la pluralidad de normas de distinto rango que conforman su régimen jurídico actual.

La Ley moderniza el régimen jurídico de aplicación, de dos formas: por un lado, se articulan distintos mecanismos para que la gestión se desarrolle con la debida eficacia y eficiencia, en beneficio de los ciudadanos, y, por otro lado, se confiere mayor relevancia y distintas facultades a los destinatarios de la colaboración, los trabajadores por cuenta ajena protegidos, las empresas asociadas y los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

Por Ultimo, la Ley da cumplimiento al mandato establecido en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, que dispuso se reformara el marco normativo de las Mutuas.

## III

La estructura de la Ley responde a la necesidad de modificar la Ley General de la Seguridad Social en la materia, porque el régimen jurídico de las Mutuas de la Seguridad Social debe ubicarse junto con las instituciones que integran el Sistema al que pertenecen. A tal efecto se modifica la Subsección 2ª, de la Sección cuarta, del Capítulo VII, del Título I, lugar donde se alberga el régimen jurídico de aquellas.

El apartado Uno del artículo único de la Ley comprende 11 artículos que sustituyen en su integridad al articulado de la mencionada Subsección 2ª, siendo de destacar los aspectos que seguidamente se señalan.

En primer lugar se define la naturaleza jurídica de las Mutuas de la Seguridad Social, así como las funciones que las mismas desarrollan por delegación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a quien corresponde su titularidad. Asimismo se detallan las diferentes contingencias o prestaciones que gestionan, en concordancia con el artículo 72, que las distribuye en función de la clase de vínculo incorporado a la Mutua, empresarios asociados o trabajadores autónomos adheridos.

También se aclara que todas las prestaciones y servicios que las Mutuas dispensan son prestaciones y servicios de la Seguridad Social y, por tanto, sujetos al régimen jurídico de aplicación común. Asimismo se establece que la prestación de asistencia sanitaria deriva de la cobertura de las contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), y, por tanto, asociada a la situación de incapacidad temporal por dichas contingencias. Es por ello que se trata de una prestación contributiva, prevista con tal carácter en la Ley General de la Seguridad Social.

La presente Ley atribuye a la jurisdicción del Orden Social el conocimiento de las reclamaciones que tengan por objeto prestaciones de la Seguridad Social, incluidas las asistenciales, o se fundamenten en la gestión de las mismas, como son las de carácter indemnizatorio, con la finalidad de residenciar en el Orden jurisdiccional especializado la materia e identificar a los titulares y legitimados, superando así las incertidumbres existentes.

El artículo 71 mejora la regulación de la estructura interna de las Mutuas de la Seguridad Social. En este sentido establece los órganos de gobierno, su composición y funciones. Es de destacar que por vez primera se contempla la figura del Presidente y la posición que ocupa dentro de la mutua. Asimismo se aplican a este ámbito los principios de transparencia que viene propugnando el Gobierno mediante distintas medidas legislativas, como por ejemplo la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En este sentido se atribuyen a los empresarios asociados las facultades de impugnación de acuerdos lesivos o contrarios a Derecho, así como la exigencia de responsabilidad directa a los miembros de los distintos órganos directivos. En esta línea se regulan los supuestos que originan la responsabilidad personal y directa, atribuyéndose esta al autor de los actos que incurra en dolo o culpa grave. De esta forma se pospone al rango de subsidiaria la responsabilidad mancomunada, lo que mejorará los niveles de corrección en la gestión.

Como elemento novedoso se articula la participación de los agentes sociales a través de las Comisiones de Control y Seguimiento, a las que se incorpora una representación de las Asociaciones profesionales de los trabajadores autónomos, dada la importancia cada vez mayor de este colectivo en la gestión de las Mutuas.

Los aspectos económicos se regulan en la presente Ley con el propósito de superar ciertas incoherencias existentes y otorgar seguridad jurídica. Se establecen las distintas clases de recursos que se transfieren a las Mutuas por la Tesorería General de la Seguridad Social para su mantenimiento y el ejercicio de sus funciones. Estos recursos consisten en cuotas de la Seguridad Social, así como rendimientos y plusvalías resultantes de las inversiones en los activos autorizados. Asimismo se autoriza que las Mutuas eleven su capacidad de administración en materia de gastos de personal y gastos corrientes, que se limitan por la vía del presupuesto anual aprobado a los créditos inicialmente asignados a los Capítulos I y II del Presupuesto de Gastos.

Al objeto de potenciar el aprovechamiento de los centros asistenciales adscritos a las mutuas, se facilita su utilización por los Servicios Públicos de Salud, por las Entidades Gestoras y por otras Mutuas de la Seguridad Social. A tal efecto se autoriza que los ingresos que se obtengan en virtud de las compensaciones que se autoricen, puedan imputarse al Presupuesto de Gastos minorando las obligaciones corrientes del ejercicio en gastos de funcionamiento.

La Ley regula los resultados anuales y las Reservas, definiéndolas con detalle. Se establece la obligación de limitar, con un nivel máximo de cobertura, tanto la dotación de la Reserva de Estabilización de las Contingencias Profesionales como la correspondiente a la Reserva de Estabilización por Cese de Actividad de los trabajadores autónomos.

Se define el destino del excedente resultante para cada una de las contingencias una vez descontadas las reservas correspondientes. Así el 80 por ciento del excedente proveniente de contingencias profesionales se destinará al Fondo de Contingencias Profesionales, anteriormente denominado Fondo de Prevención y Rehabilitación. El 20 por ciento restante debe dirigirse a la Reserva complementaria. Si los estatutos de la mutua incorporan la existencia de una Reserva de asistencia social esta debe incorporar el 10 por ciento de ese excedente quedando solamente otro 10 por ciento para la anterior reserva complementaria. En cuanto al excedente por la gestión de las contingencias comunes, éste debe incorporarse íntegramente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Finalmente, se regulan los supuestos de medidas cautelares, su contenido y efectos, las causas que originan la responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados y su forma de exigirse, así como las causas de disolución y liquidación de las Mutuas y los procedimientos correspondientes.

#### IV

El apartado Dos del artículo único modifica la disposición adicional undécima de la Ley General de la Seguridad Social, que regula las particularidades de la gestión por las Mutuas de la Seguridad Social de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. En este sentido se articulan distintos mecanismos para elevar los niveles de coordinación y eficacia en este ámbito de la gestión con los Servicios Públicos de Salud, a quienes corresponde dispensar la asistencia sanitaria en estos casos. A tal efecto se facilita a las Mutuas la facultad de realizar las actividades de control y seguimiento de la baja médica. Por otro lado, se mejora la coordinación antes mencionada, mediante la figura de la propuesta de alta médica, debidamente fundamentada, estableciéndose un procedimiento de plazos breves para obtener una respuesta más ágil.

## V

La Ley termina con una disposición adicional, cuatro transitorias, una derogatoria y cinco finales. Entre las mismas se destaca la supresión de las sociedades de prevención de las Mutuas y la mejora de la protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos a la vista de las deficiencias observadas.

*Artículo Único. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.*

El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda redactado en los siguientes términos:

Uno. La Subsección 2.<sup>1</sup> de la Sección Cuarta del Capítulo VII del Título I queda redactada del siguiente modo:

*"Subsección 2.<sup>a</sup> Mutuas de la Seguridad Social.*

### **Artículo 68. Definición y objeto.**

1. Son Mutuas de la Seguridad Social las asociaciones de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el Registro especial dependiente de éste, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en esta Ley.

Las Mutuas de la Seguridad Social, una vez constituidas, adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. El ámbito de actuación de las mismas se extiende a todo el territorio del Estado.

2. Es objeto de las Mutuas de la Seguridad Social el desarrollo, por delegación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de las siguientes funciones de la Seguridad Social:

- a) La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.
- b) La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- c) La gestión de la prestación por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
- d) La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los

trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en el artículo 15 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto.

- e) La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, así como las demás actividades y funciones de la Seguridad Social que les sean delegadas legalmente.

3. Las prestaciones y los servicios atribuidos a la gestión de las Mutuas de la Seguridad Social forman parte de la acción protectora del Sistema y se dispensarán a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los trabajadores por cuenta propia adheridos conforme a las normas del Régimen de la Seguridad Social en el que están encuadrados y con el mismo alcance que dispensan las Entidades Gestoras en los supuestos atribuidos a las mismas, con las siguientes particularidades:

- a) Las prestaciones sanitarias comprendidas en la protección de las contingencias profesionales serán dispensadas a través de los medios e instalaciones adscritos a las Mutuas para su desarrollo, mediante convenios con otras Mutuas o con las Administraciones Públicas Sanitarias, así como mediante conciertos con medios privados, en los términos establecidos en el artículo 199 y en las normas reguladoras del funcionamiento de las Entidades.
- b) La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se desarrollará en los términos y condiciones establecidos en la disposición adicional undécima.
- c) Las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social son prestaciones asistenciales a favor de los empresarios asociados y de sus trabajadores dependientes, así como de los trabajadores por cuenta propia adheridos, que no generan derechos subjetivos, dirigidos a asistir a los mismos en el control y, en su caso, reducción de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Igualmente tienen por objeto la investigación de las causas que originan las expresadas contingencias profesionales de la Seguridad Social.

Corresponderá al Órgano de dirección y tutela de las Mutuas de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, establecer la planificación periódica de las actividades preventivas de la Seguridad Social que desarrollaran aquellas, sus criterios, contenido y orden de preferencias, así como tutelar su desarrollo y evaluar su eficacia y eficiencia. Las Comunidades Autónomas que, en virtud de sus Estatutos de Autonomía, ostenten competencia de ejecución compartida con el Órgano de tutela, podrán proponer al mismo las actividades que consideren que deban desarrollarse en sus respectivos ámbitos territoriales, para que puedan ser consideradas en la planificación de las actividades preventivas y serán informadas sobre su ejecución.

4. Las reclamaciones que tengan por objeto prestaciones y servicios de la Seguridad Social objeto de la colaboración en su gestión o que tengan su fundamento en las mismas, incluidas las de carácter indemnizatorio, se sustanciarán por el Orden Social de la Jurisdicción de conformidad con lo

establecido en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.

5. Las obligaciones económicas que se atribuyan a las Mutuas serán pagadas con cargo a los recursos públicos adscritos para el desarrollo de la colaboración, sin perjuicio de que aquellas obligaciones que tengan por objeto pensiones se financien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.3.

6. La colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni comprenderá actividades de captación de empresas asociadas o de trabajadores adheridos. Tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de éstos en las obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios.

No tendrán la consideración de operaciones de lucro mercantil la utilización por las Mutuas de los servicios de terceros para realizar gestiones de índole administrativa que correspondan a aquellas, como complemento de su administración directa, los cuales serán retribuidos en los términos que se establezcan reglamentariamente.

7. Las Mutuas de la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

#### **Artículo 69. Constitución de las Mutuas de la Seguridad Social.**

1. La constitución de una Mutua de la Seguridad Social exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) Que concurren un mínimo de cincuenta empresarios, quienes a su vez cuenten con un mínimo de treinta mil trabajadores y un volumen de cotización no inferior al límite que se establezca reglamentariamente.
- b) Que limiten su actividad al ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 68.
- c) Que presten fianza, en la cuantía que establezcan las disposiciones de aplicación desarrollo de esta Ley, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.
- d) Que exista autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, previa aprobación de los Estatutos de la Entidad, e inscripción en el Registro administrativo dependiente del mismo.

2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, una vez comprobada la concurrencia de los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del apartado anterior y que los estatutos se ajustan al ordenamiento jurídico, autorizara la constitución de la Mutua de la Seguridad Social y ordenara su inscripción en el

Registro de Mutuas de la Seguridad Social dependiente del mismo. La Orden de autorización se publicara en el Boletín Oficial del Estado, en la que asimismo se consignara su número de registro, adquiriendo desde entonces personalidad jurídica

3. La denominación de la Mutua incluirá la expresión "Mutua de la Seguridad Social", seguida del número con el que haya sido inscrita. La denominación deberá ser utilizada en todos los centros y dependencias de la entidad, así como en sus relaciones con sus asociados, adheridos y trabajadores protegidos, y con terceros.

#### **Artículo 70. Régimen económico-financiero.**

1. El sostenimiento y funcionamiento de las Mutuas de la Seguridad Social, así como de las actividades, prestaciones y servicios comprendidos en su objeto, se financiarán mediante las cuotas de la Seguridad Social adscritas a las mismas, los rendimientos, incrementos, contraprestaciones y compensaciones obtenidos tanto de la inversión financiera de estos recursos como de la enajenación y desadscripción por cualquier título de los bienes muebles e inmuebles de la Seguridad Social adscritos a aquellas y, en general, mediante cualquier ingreso obtenido en virtud del ejercicio de la colaboración o por el empleo de los medios de la misma.

La Tesorería General de la Seguridad Social entregara a las Mutuas las cuotas por accidente de trabajo y enfermedades profesionales ingresadas por los empresarios asociados a cada una o por los trabajadores por cuenta propia adheridos, así como la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, la cuota por cese en la actividad de los trabajadores autónomos y el resto de cotizaciones que correspondan por las contingencias y prestaciones que gestionen, previa deducción de las aportaciones destinadas a las Entidades Públicas del Sistema por el reaseguro obligatorio y por la gestión de los servicios comunes, así como de las cantidades que, en su caso, se establezcan legalmente.

2. Los derechos de crédito que se generen a consecuencia de prestaciones o servicios que dispensen las Mutuas a favor de personas no protegidas por las mismas o, cuando estando protegidas, corresponda a un tercero su pago por cualquier así como los originados por prestaciones indebidamente satisfechas, son recursos públicos del Sistema de la Seguridad Social adscritos a aquéllas.

El importe de estos créditos será liquidado por las Mutuas, las cuales reclamaran su pago del sujeto obligado en la forma y condiciones establecidos en la norma o concierto del que nazca la obligación y hasta obtener su pago o, en su defecto, el título jurídico que habilite la exigibilidad del crédito, el cual comunicarán a la Tesorería General de Seguridad Social para su recaudación con arreglo al

procedimiento establecido en esta ley y en sus normas de desarrollo.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en todos los procedimientos dirigidos al cobro de la deuda, podrá autorizar el pago de los derechos de crédito en forma distinta a la de su ingreso en metálico, incluida la dación de bienes, y determinará el importe líquido del crédito que resulte extinguido, así como los términos y condiciones aplicables hasta la extinción del derecho.

Cuando los ingresos tengan su causa en los servicios previstos en el art. 68.3 a), dispensados a trabajadores no incluidos en el ámbito de gestión de la Mutua, se ingresarán en aquella que los haya prestado, imputándose simultáneamente a su presupuesto de gastos como minoración de las obligaciones del ejercicio corriente en gastos de funcionamiento, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Los créditos cuyo cobro no fuera posible después de desarrollar las actividades previstas en este apartado por prescripción del derecho, insolvencia del obligado, paradero desconocido del mismo u otra causa, así como aquellos créditos cuya extinción haya sido declarada por sentencia firme, siempre que no existan sucesores de la obligación por título "ínter vivos" o "mortis causa", serán declarados por la Mutua como créditos incobrables, expresando su causa, y se considerarán extinguidos. Este acuerdo junto con los documentos que justifiquen la declaración, se conservarán en la Mutua a disposición de los órganos administrativos de control.

3. Son gastos de administración de las Mutuas de la Seguridad Social los derivados del sostenimiento y funcionamiento de los servicios administrativos de la colaboración y comprenderán los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y las amortizaciones de bienes inventariables. Estarán limitados anualmente al importe resultante de aplicar sobre los ingresos de cada ejercicio el porcentaje que corresponda de la escala que se establecerá reglamentariamente.

Las Mutuas podrán disponer de las cantidades que se les asignen en sus presupuestos de gastos para gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios, sin superar las cuantías de los créditos inicialmente asignados a estos fines en los Capítulos I y II y sin perjuicio de las limitaciones y obligaciones que, en su caso, se establezcan en la Ley 47/2003, de 27 de noviembre, General Presupuestaria, en esta Ley y en sus normas de aplicación y desarrollo.

### **Artículo 71. Órganos de gobierno y participación.**

1. Los órganos de gobierno de las Mutuas de la Seguridad Social son la Junta General, la Junta Directiva y el Director Gerente.

El Órgano de participación institucional es la Comisión de Control y Seguimiento.

La Comisión de Prestaciones Especiales es el Órgano a quien corresponde la concesión de los beneficios de la asistencia social potestativa prevista en el artículo 76, apartado 2.

2. La Junta General es el órgano de gobierno superior de la Mutua y estará integrada por todos los empresarios asociados y un representante de los trabajadores dependientes de la Mutua. Carecerán de derecho de voto aquellos empresarios que no estén al corriente en el pago de las cotizaciones sociales.

La Junta General se reunirá con carácter ordinario una vez al año para aprobar el anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y con carácter extraordinario las veces que sea convocada por la Junta Directiva cumplidos los requisitos que reglamentariamente se establezcan para su convocatoria y celebración.

Es competencia de la Junta General, en todo caso, la designación y renovación de los miembros de la Junta Directiva, la reforma de los Estatutos, la fusión, absorción y disolución de la Entidad, la designación de los liquidadores y la exigencia de responsabilidad a los miembros de la Junta Directiva.

Reglamentariamente se regulará el procedimiento y requisitos de convocatoria a las Juntas Generales y el régimen de deliberación y adopción de sus acuerdos, así como el ejercicio por los asociados de las acciones de nulidad o anulación de acuerdos lesivos o contrarios a Derecho, y de exigencia de responsabilidad.

3. La Junta Directiva es el Órgano colegiado a quien corresponde el gobierno directo de la Mutua. Estará compuesta por entre diez y quince empresarios asociados designados por la Junta General, de los cuales el treinta por ciento corresponderán a aquellas que cuenten con mayor número de trabajadores, determinadas con arreglo a los tramos que se establecerán reglamentariamente. También formará parte el representante de los trabajadores mencionado en el apartado 1. El nombramiento de miembros de la Junta Directiva estará supeditado a la confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a excepción del representante de los trabajadores, y entre sus miembros se designará al Presidente de la misma.

Es competencia de la Junta Directiva la convocatoria de la Junta General, la ejecución de los acuerdos adoptados por la misma, la formulación de los anteproyectos de presupuestos y de las cuentas anuales, que deberán ser firmados por el Presidente de la entidad, así como la exigencia de responsabilidad al Director Gerente y demás funciones que se establezcan no reservadas a la Junta General. Reglamentariamente se regulará el régimen de funcionamiento de la Junta Directiva y de exigencia de responsabilidad.

Corresponde al Presidente de la Junta Directiva la representación de la Mutua de la Seguridad Social, la convocatoria de las reuniones a la misma y moderar sus deliberaciones. El Director Gerente mantendrá informado al Presidente de la gestión de la Mutua y seguirá las indicaciones que el mismo, en su caso, le

imparta. El régimen de indemnizaciones que se establezca regulará las que correspondan al Presidente de la Mutua por las funciones específicas atribuidas.

No podrá recaer en la misma persona y simultáneamente más de un cargo de la Junta Directiva, ya sea por sí mismo o en representación de otras empresas asociadas, ni podrán formar parte de la Junta las empresas o personas que mantengan relación laboral o de servicios con la Mutua, a excepción del representante de los trabajadores.

4. El Director Gerente es el Órgano que ejerce la dirección ejecutiva de la Mutua y a quien corresponde desarrollar sus objetivos generales y la dirección ordinaria de la entidad, sin perjuicio de estar sujeto a los criterios e instrucciones que, en su caso, le impartan la Junta Directiva y el Presidente de la misma.

El Director Gerente estará vinculado mediante contrato de alta dirección regulado por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. Será nombrado por la Junta Directiva, estando supeditada la eficacia del nombramiento y la del contrato de trabajo a la confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

No podrán ostentar el cargo de Director-Gerente las personas que pertenezcan al Consejo de Administración o desempeñen actividad remunerada en cualquier empresa asociada a la Mutua, sean titulares de una participación igual o superior al 25 por ciento del capital social de aquellas o bien la titularidad corresponda al cónyuge o hijos de aquél. Tampoco podrán ser designadas las personas que hayan sido suspendidas de sus funciones en virtud de expediente sancionador hasta que se extinga la suspensión. Iguales limitaciones serán aplicables al personal que ejerza funciones ejecutivas.

Las retribuciones del Director Gerente se clasificarán en básicas y complementarias. Las retribuciones básicas estarán limitadas por la más alta de las asignadas por el mismo concepto a los Directores Generales de las Entidades Gestoras y Servicios Centrales de la Seguridad Social, y las retribuciones complementarias se determinarán en función de la dimensión de la Mutua y de la eficiencia de la gestión, en los términos que establezca el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En todo caso el conjunto de las retribuciones no podrán superar las asignadas al Presidente ejecutivo o cargo equivalente de las entidades del sector público empresarial.

El resto del personal que ejerza funciones ejecutivas dependerá del Director Gerente y también estará vinculado por contratos de alta dirección. Sus retribuciones se clasificarán en básicas y complementarias, cuyos importes se determinarán reglamentariamente en función de la dimensión de la Mutua y de la eficiencia de la gestión. El personal no directivo estará sujeto a relación laboral ordinaria, regulada en el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

5. La Comisión de Control y Seguimiento es el Órgano de participación de los agentes sociales, a quien corresponde el conocimiento e información de la gestión que realiza la entidad en las distintas modalidades de la colaboración,

proponer medidas para mejorar el desarrollo de las mismas en el marco de los principios y objetivos de la Seguridad Social, informar el anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y, en general, conocer los criterios que mantiene la Mutua en el desarrollo de su objeto social. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social regulará la composición y el régimen de funcionamiento de las Comisiones de Control y Seguimiento, previo informe del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La Comisión estará compuesta por un máximo de doce miembros designados por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como por una representación de las asociaciones profesionales de los trabajadores autónomos. Será Presidente de la Comisión el que en cada momento lo sea de la propia Mutua.

No podrán formar parte de la Comisión de Control y Seguimiento cualquier miembro de la Junta Directiva, a excepción del Presidente, o persona que trabaje para la Entidad.

6. La Comisión de Prestaciones Especiales será competente para la concesión de los beneficios de la asistencia social que tenga establecidos la Mutua de la Seguridad Social a favor de los trabajadores protegidos o adheridos y sus derecho habientes que hayan sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y se encuentren en especial estado o situación de necesidad. Los beneficios serán potestativos e independientes de los comprendidos en la acción protectora de la Seguridad Social.

La Comisión estará integrada por el número de miembros que se establecerá reglamentariamente, de los cuales la mitad corresponderá a representantes de los trabajadores de las empresas asociadas y la otra mitad a representantes de empresarios asociados, siendo estos últimos designados por la Junta Directiva, asimismo tendrán representación los trabajadores adheridos. El Presidente será designado por la Comisión entre sus miembros.

7. No podrán formar parte de la Junta Directiva, de la Comisión de Control y Seguimiento ni de la Comisión de Prestaciones Especiales de una Mutua de la Seguridad Social las personas que formen parte de cualquiera de estos órganos en otra Mutua, por sí mismos o en representación de empresas asociadas o de organizaciones sociales, así como aquellos que ejerzan funciones ejecutivas en otra entidad.

Los cargos anteriores o sus representantes en los mismos, así como las personas que ejerzan funciones ejecutivas en las Mutuas no podrán comprar ni vender para sí mismos cualquier activo patrimonial de la entidad ni celebrar contratos de ejecución de obras, de realización de servicios o de entrega de suministros, excepto las empresas de servicios financieros o de suministros esenciales, que requerirán para contratar autorización previa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ni celebrar contratos en los que concurran conflictos de intereses. Tampoco podrán realizar esos actos las personas vinculadas a aquellos cargos o

personas mediante relación de parentesco, en línea directa o colateral, consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado, ni las personas jurídicas en las que cualquiera de las mencionadas personas, cargos o parientes sean titulares, directa o indirectamente, de un porcentaje igual o superior al 25 por ciento del capital social, ejerzan en las mismas funciones que impliquen poder de decisión o formen parte de sus órganos de administración o gobierno.

La condición de miembro de la Junta Directiva, de la Comisión de Control y Seguimiento y de las Comisiones de Prestaciones Especiales será gratuita, sin perjuicio de que la Mutua en la que se integren les indemnice y compense por los gastos de asistencia a las reuniones de los respectivos órganos, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

8. Los miembros de la Junta Directiva, el Director Gerente y las personas que ejerzan funciones ejecutivas serán responsables directos frente a la Seguridad Social, la Mutua y los empresarios asociados de los daños que causen por sus actos contrarios a las normas jurídicas de aplicación, a los Estatutos o a las instrucciones dictadas por el órgano de tutela, siempre que tuvieran conocimiento de la antijuridicidad del acto o el mismo les fuera exigible por razón de sus funciones. Se entenderá como acto propio las acciones y omisiones comprendidas en los respectivos ámbitos funcionales o de competencias.

La responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva será solidaria. No obstante, estarán exentos aquellos miembros que prueben que, no habiendo intervenido en la adopción o ejecución de un acto, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a él.

Las Mutuas de la Seguridad Social, mediante la responsabilidad mancomunada regulada en el apartado 3 del artículo 75 ter, responderá directamente de los actos lesivos en cuya ejecución concorra culpa leve o no exista responsable directo. Asimismo responderá subsidiariamente en los supuestos de insuficiencia patrimonial de los responsables directos.

9. Los derechos de crédito que nazcan de las responsabilidades establecidas en este artículo, así como de la responsabilidad mancomunada que asumen los empresarios asociados, prevista en el artículo 75 ter, son recursos públicos de la Seguridad Social adscritos a las Mutua en la que concurrieron los hechos origen de la responsabilidad.

Corresponde al órgano de dirección y tutela la declaración de las responsabilidades establecidas en el párrafo anterior, de las obligaciones objeto de las mismas, así como determinar su importe líquido, reclamar su pago con arreglo a las normas que regulan la colaboración de las entidades y determinar los medios de pago, las modalidades, formas, términos y condiciones aplicables hasta su extinción.

El Órgano de dirección y tutela podrá solicitar a la Tesorería General de la

Seguridad Social la recaudación ejecutiva de los derechos de crédito derivados de estas responsabilidades, a cuyo efecto trasladará a la misma el acto de liquidación de aquellos y la determinación de los sujetos obligados. Las cantidades que se obtengan se ingresarán en las cuentas que dieron lugar a la exigencia de la responsabilidad en los términos que establezca el Órgano de dirección y tutela.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en aplicación de sus facultades de dirección y tutela, podrá reclamar el pago o ejercitar las acciones legales que sean necesarias para la declaración o exigencia de las responsabilidades generadas con motivo del desarrollo de la colaboración, así como comparecer y ser parte en los procesos legales que afecten a las responsabilidades establecidas.

## **Artículo 72. *Empresarios asociados y trabajadores por cuenta propia adheridos.***

1. Los empresarios podrán formalizar la protección de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de la Seguridad Social con la Entidad Gestora competente o mediante asociación a una Mutua de la Seguridad Social. En caso de optar por una Mutua, deberán proteger en la misma entidad a todos los trabajadores correspondientes a los centros de trabajo situados en la misma provincia, entendiéndose por estos la definición contenida en el Estatuto de los Trabajadores.

Igualmente, los empresarios asociados podrán optar porque la misma Mutua gestione la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes respecto de los trabajadores protegidos frente a las contingencias profesionales.

El convenio de asociación es el instrumento por el que se formaliza la asociación a la Mutua y tendrá un periodo de vigencia de tres años, que podrá prorrogarse por periodos de igual duración. Reglamentariamente se regulará el procedimiento para formalizar el convenio, su contenido, las causas de resolución anticipada y sus efectos.

2. Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, cuya acción protectora incluya voluntaria u obligatoriamente la prestación económica por incapacidad temporal, podrán optar por adherirse a una Mutua de la Seguridad Social para la gestión de la misma. No obstante, los trabajadores que se hayan incorporado al Régimen Especial a partir del día 1 de enero de 1998, deberán formalizar la misma con una Mutua de la Seguridad Social, así como aquellos adheridos a una Mutua desde la indicada fecha que cambien de entidad.

Cuando los trabajadores adheridos para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal asimismo incluyan en la acción protectora del Régimen,

voluntaria u obligatoriamente, las contingencias profesionales, deberán formalizar su protección con la Mutua que gestione la protección del subsidio. Igualmente deberán adherirse aquellos que cubran exclusivamente las contingencias profesionales.

La protección se formalizare mediante Documento de Adhesión, por el cual el trabajador por cuenta propia se incorpora al ámbito gestor de la Mutua de forma externa a la base asociativa de la misma y sin adquirir los derechos y obligaciones derivados de la asociación. El periodo de vigencia de la adhesión será de tres años, pudiendo prorrogarse por periodos de igual duración. El procedimiento para su formalización, contenido, las causas de resolución anticipada y sus efectos, se regularán reglamentariamente.

3. Los trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que opten voluntariamente por acogerse al sistema de protección por cese de actividad, regulado en la Ley 32/2010, de 8 de agosto, formalizaren la gestión del mismo con la Mutua a la que se encuentren adheridos mediante la suscripción del Anexo correspondiente al documento de adhesión, en los términos que establezcan las normas reglamentarias que regulan la colaboración.

4. Las Mutuas de la Seguridad Social deberán aceptar toda proposición de asociación y de adhesión que se les formule, sin que la falta de pago de las cotizaciones sociales les excuse del cumplimiento de la obligación ni constituya causa de resolución del convenio o documento suscrito, o sus anexos.

### **Artículo 73. Competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social**

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 5, corresponde al Ministerio de Empleo y Seguridad Social las facultades de dirección y tutela sobre las Mutuas de la Seguridad Social, en virtud de la titularidad que ostenta de las funciones y servicios que constituyen el objeto social de las mismas y de la naturaleza pública de los recursos económicos afectos a su desarrollo.

Las facultades de dirección y tutela se ejercerán en los términos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, a través del órgano administrativo a quien se atribuyan las funciones.

2. Las Mutuas de la Seguridad Social serán, objeto anualmente de una auditoria de cuentas, que se realizará por la Intervención General de la Seguridad Social de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 27 de noviembre, General Presupuestaria, a cuyo efecto, en caso de insuficiencia de medios propios, aquella podrá solicitar la colaboración de medios privados, previa autorización ministerial, los cuales ejecutaren el servicio conforme a las normas e instrucciones que disponga el mencionado Centro directivo, y se ajustaran a las revisiones y controles de calidad que aquel, en su caso, establezca.

El informe provisional de auditoría de cumplimiento, adicional al de las cuentas anuales, será remitido por la Intervención General de la Seguridad Social al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su conformidad o reparos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34.6 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, que regula el régimen de control interno ejercido por el mencionado Centro directivo, en el plazo máximo de cinco meses desde la emisión del informe de la auditoría de cuentas. En caso de conformidad, el informe definitivo se emitirá dentro del mes siguiente a este acuerdo, y dará lugar a que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sin más trámite, dicte Resolución disponiendo la adopción de las medidas y actuaciones que procedan conforme al contenido del informe.

3. Las Mutuas de la Seguridad Social ajustarán su contabilidad al Plan General de Contabilidad de la Seguridad Social y rendirán sus cuentas al Tribunal de Cuentas.

Anualmente elaborarán sus anteproyectos de presupuestos de ingresos y gastos de la gestión de la Seguridad Social y los remitirán al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su integración en el proyecto del Presupuesto de la Seguridad Social.

4. La inspección de las Mutuas de la Seguridad Social será ejercida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con arreglo a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, quienes comunicarán al Órgano de dirección y tutela el resultado de las actuaciones desarrolladas y los informes y propuestas que resulten de las mismas.

5. Las Mutuas de la Seguridad Social estarán obligadas a facilitar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social cuantos datos e información les solicite en orden al adecuado conocimiento del estado de la colaboración y de las funciones y actividades que desarrollan, así como sobre la gestión y administración del patrimonio histórico, y deberán cumplir las instrucciones que imparta el órgano de dirección y tutela.

Los empresarios asociados, sus trabajadores y los trabajadores por cuenta propia adheridos tendrán derecho a ser informados por las Mutuas acerca de los datos referentes a ellos que obren en las mismas. Asimismo podrán dirigirse al Órgano de dirección y tutela formulando quejas y peticiones con motivo de las deficiencias que aprecien en el desarrollo de las funciones atribuidas, a cuyo efecto las Mutuas de la Seguridad Social mantendrán en todos sus Centros administrativos o asistenciales Libros de Reclamaciones a disposición de los interesados destinadas al mencionado Órgano administrativo, sin perjuicio de que los mismos puedan utilizar los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y aquellos que se establezcan reglamentariamente.

#### **Artículo 74. Patrimonio y régimen de la contratación.**

1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 17 y 80.1, los ingresos establecidos en el apartado 1 del artículo 70, así como los bienes muebles e inmuebles en que puedan invertirse los mismos, y, en general, los derechos, acciones y recursos relacionados con ellos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están adscritos a las Mutuas para el desarrollo de las funciones de la Seguridad Social atribuidas, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La adquisición por cualquier título de los inmuebles necesarios para el desarrollo de las funciones atribuidas y su enajenación se acordará por las Mutuas, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, correspondiendo a la Tesorería General de la Seguridad Social la formalización del acto en los términos autorizados, y se titularán e inscribirán en el Registro de la Propiedad a nombre del Servicio Común. La adquisición llevará implícita su adscripción a la Mutua autorizada. Igualmente las entidades podrán solicitar autorización para que se les adscriban inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social adscritos a las Entidades Gestoras, los Servicios Comunes u otras Mutuas, así como para la desadscripción de aquellos afectados, lo que requerirá conformidad de las interesadas y obligará a compensar económicamente a la entidad cedente por aquella que reciba la posesión de los bienes.

Corresponde a las Mutuas de la Seguridad Social la conservación, disfrute, mejora y defensa de los bienes adscritos, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Respecto de los bienes inmuebles, corresponderá a aquellas el ejercicio de las acciones posesorias y a Tesorería General el ejercicio de las acciones dominicales.

No obstante la titularidad pública del patrimonio, dada la gestión singularizada del mismo y el régimen económico-financiero establecido para las actividades de la colaboración, los bienes que integran el patrimonio adscrito estarán sujetos a los resultados de la gestión, pudiendo liquidarse para atender las necesidades de la misma y el pago de prestaciones u otras obligaciones derivadas de las expresadas actividades, sin perjuicio de la responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados. El producto que se obtenga de la enajenación de los indicados bienes o de su cambio de adscripción a favor de otra Mutua o de las Entidades Públicas del Sistema, se ingresará en la Mutua de la que procedan.

2. Los bienes incorporados al patrimonio de las Mutuas con anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el periodo comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que en este último caso se trate de bienes que provengan del 20 por 100 del exceso de excedentes, así como los que procedan de recursos distintos de los que tengan su origen en las cuotas de Seguridad Social, constituyen el patrimonio histórico de las Mutuas, cuya propiedad les

corresponde en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a que se refiere el artículo 73, apartado 1.

Este patrimonio histórico se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la entidad, sin que de su dedicación al mismo puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social. Considerando la estricta afectación de este patrimonio a los fines de colaboración de las Mutuas con la Seguridad Social, ni los bienes ni los rendimientos que, en su caso, produzcan pueden desviarse hacia la realización de actividades mercantiles.

Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el párrafo anterior, las Mutuas que cuenten con bienes inmuebles integrantes de su patrimonio histórico, destinados a ubicar centros y servicios sanitarios o administrativos adscritos al desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social que tienen encomendada, podrán cargar en sus respectivas cuentas de gestión un canon o coste de compensación por la utilización de tales inmuebles, previa autorización y en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

3. Las Mutuas de la Seguridad Social ajustarán su actividad contractual a las normas de aplicación a los poderes adjudicadores que no revisten el carácter de Administración Pública, contenidas en la Ley de Contratos del Sector Público, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y sus normas de desarrollo.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará los pliegos de cláusulas administrativas generales que regirán la contratación, así como las instrucciones de aplicación a los procedimientos que tengan por objeto contratos no sujetos a regulación armonizada, previo informe del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

En los procedimientos de contratación se garantizarán los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, pudiendo licitar en los mismos los empresarios asociados y los trabajadores adheridos, en cuyo caso no podrán formar parte de los órganos de contratación, por sí mismos ni a través de mandatarios. Tampoco podrán formar parte de los Órganos de contratación las personas vinculadas al licitador por parentesco, por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado, ni las sociedades en las que los mismos ostenten una participación, directa o indirectamente, igual o superior al 25 por ciento del capital social o ejerzan en las mismas funciones que impliquen el ejercicio de poder de decisión.

Reglamentariamente se regulará las especialidades de aplicación a las operaciones que supongan inversiones reales, inversiones financieras o a la actividad contractual excluida de la Ley de Contratos del Sector Público.

4. Las Mutuas de la Seguridad Social, gozarán de exención tributaria, en los términos que se establecen para las entidades gestoras en el apartado 1 del

artículo 65.

**Artículo 75. Resultado económico y reservas.**

1. El resultado económico se determinará anualmente por la diferencia entre los ingresos y los gastos imputables a cada uno de los siguientes ámbitos de la gestión:

- a) Gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, de la prestación económica por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, de la prestación por cuidado de menores afectados de cáncer u otra enfermedad grave y de las actividades preventivas de la Seguridad Social.
- b) Gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes o bien de contingencias indiferenciadas.
- c) Gestión de la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, sin perjuicio de actuar la Mutua en este ámbito exclusivamente como organismo gestor.

En el ámbito de la gestión de las contingencias profesionales se constituirá una provisión para contingencias en tramitación, que comprenderá la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por invalidez y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentre pendiente al cierre del ejercicio.

2. En cada uno de los ámbitos mencionados en el apartado 1 se constituirá una Reserva de Estabilización, que se dotaran con el resultado económico positivo obtenido anualmente, cuyo destino será el corregir las posibles desigualdades de los resultados económicos generados entre los diferentes ejercicios en cada uno de los ámbitos. Las cuantías de las Reservas serán las siguientes:

- a) La Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales tendrá una cuantía mínima equivalente al 30 por ciento de la media anual de las cuotas ingresadas en el Último trienio por las contingencias y prestaciones señaladas en el epígrafe a) del apartado 1, el cual, voluntariamente, podrá elevarse hasta el 45 por ciento, que constituirá el nivel máximo de dotación de la reserva.
- b) La Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes tendrá una cuantía mínima equivalente al 5 por ciento de las cuotas ingresadas durante el ejercicio económico por las mencionadas contingencias, la cual podrá incrementarse voluntariamente hasta el 25 por ciento, que constituirá el nivel máximo de cobertura.
- c) La Reserva de Estabilización por Cese en Actividad tendrá una cuantía

mínima equivalente al 5 por ciento de las cuotas ingresadas por esta contingencia durante el ejercicio, que podrá incrementarse voluntariamente hasta el 25 por ciento de las mismas cuotas, que constituirá el nivel máximo de cobertura.

Asimismo, las Mutuas constituirán en la Tesorería General de la Seguridad Social una Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de la Actividad, cuyo destino será garantizar la suficiencia financiera de este sistema de protección. La cuantía se corresponderá con la diferencia entre el importe destinado a la Reserva de Estabilización por Cese en la Actividad y la totalidad del resultado neto positivo.

3. Los resultados negativos obtenidos en los ámbitos previstos en las letras a) y b) del apartado 1 se cancelarán aplicando la respectiva Reserva de Estabilización. En caso de que la misma se sitúe por debajo de su nivel mínimo de cobertura, se repondrá hasta el mencionado nivel con cargo a la Reserva Complementaria prevista en el artículo 75 bis, apartado 1.b).

Cuando después de realizadas las operaciones establecidas en el párrafo anterior persista el déficit en el ámbito de la gestión de las contingencias profesionales o la dotación de la Reserva de Estabilización Específica sea inferior al mínimo obligatorio, se aplicará a la cancelación del déficit y a dotar la Reserva hasta el mencionado nivel mínimo obligatorio, el tramo de dotación voluntaria de la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes y, en caso de insuficiencia, será de aplicación, en su caso, lo establecido en el artículo 75 ter.

Respecto del ámbito de la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, en el supuesto de que después de aplicada la Reserva Complementaria prevista en el párrafo primero persista el déficit o la dotación de la Reserva Específica se sitúe en una cuantía inferior a su nivel mínimo obligatorio, se aplicará a la cancelación del déficit y a dotar la Reserva de Estabilización específica de este ámbito, hasta situarla en su nivel mínimo de cobertura, la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales. En caso de que una vez aplicada esta última Reserva, la misma se sitúe en los niveles previstos en la letra a) del apartado 1 del artículo 75 ter, resultarán de aplicación las medidas establecidas en este artículo.

4. Los resultados negativos de la gestión de las prestaciones por cese en la actividad se enjugarán aplicando la Reserva específica constituida en las Mutuas y, en caso de insuficiencia, se aplicará la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad constituida en Tesorería General de la Seguridad Social hasta cancelar el déficit y reponer hasta su nivel mínimo de dotación aquella Reserva, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

### **Artículo 75 bis. Excedentes y Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social**

1. El excedente que resulte después de dotar la Reserva de Estabilización de contingencias profesionales se aplicará de la siguiente forma:

- a) El 80 por ciento del excedente obtenido en el ámbito señalado en el epígrafe a) del apartado 1 del artículo 75, se ingresará con anterioridad al 31 de julio de cada ejercicio en la cuenta especial del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, abierta en el Banco de España a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social y a disposición del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social estará integrado por el metálico depositado en la cuenta especial, por los valores mobiliarios y demás bienes muebles e inmuebles en que aquellos fondos se inviertan y, en general, por los recursos, rendimientos e incrementos que tengan su origen en el excedente de los recursos de la Seguridad Social generado por las Mutuas. Los rendimientos y gastos que produzcan los activos financieros y los de la cuenta especial se imputaren a la misma, salvo que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social disponga otra cosa.

El Fondo estará sujeto a la dirección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y adscrito a los fines de la Seguridad Social.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá aplicar los recursos del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social a la creación o renovación de centros asistenciales y de rehabilitación adscritos a las Mutuas, a actividades de investigación, desarrollo e innovación de técnicas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores de patologías derivadas de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales a desarrollar en los Centros asistenciales adscritos a las Mutuas, así como a incentivar en las empresas la adopción de medidas y procesos que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social, mediante un sistema que se regule reglamentariamente y, en su caso, a dispensar servicios a la población protegida para el control de las contingencias profesionales. Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran estarán sujetos al régimen establecido en el apartado 1 del artículo 74.

La Tesorería General de la Seguridad Social podrá materializar los fondos depositados en la cuenta especial en activos financieros emitidos por personas jurídica públicas, así como enajenar los mismos en las cantidades, plazos y demás condiciones que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hasta que el mismo disponga su uso para las aplicaciones expresadas.

Igualmente la Tesorería General de la Seguridad Social podrá disponer de los fondos depositados en la cuenta especial, con carácter transitorio, para

atender a los fines propios del Sistema de la Seguridad Social, así como a las necesidades o desfases de tesorería, en la forma y condiciones que establezca el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hasta su aplicación por el mismo Ministerio a los fines señalados.

- b) El 20 por ciento del excedente señalado en el apartado 1, se aplicará a la dotación de la Reserva Complementaria que constituirán las Mutuas, cuyos recursos se podrán destinar al pago de exceso de gastos de administración, de gastos procesales derivados de pretensiones que no tengan por objeto prestaciones de Seguridad Social y de sanciones administrativas, en el caso de que no resulte necesaria su aplicación a los fines establecidos en el artículo 75.3.

Asimismo podrá destinarse al pago de prestaciones de asistencia social autorizadas a favor de los trabajadores accidentados protegidos por las mismas y sus derechohabientes, las cuales serán ajenas y complementarias a las incluidas en la acción protectora de la Seguridad Social, siempre que los Estatutos aprobados establezcan la Reserva de Asistencia Social destinada a estos fines, en cuyo caso su nivel máximo de cobertura será del 10 por ciento del mismo excedente, reduciéndose a la diferencia la dotación de la Reserva Complementaria. Reglamentariamente se desarrollará el régimen de las aplicaciones de estas Reservas.

2. El excedente que resulte después de dotar la Reserva de Estabilización de contingencias comunes se ingresará en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

4. El excedente que resulte después de dotar la Reserva de Estabilización por Cese de Actividad se ingresará en la Tesorería General de la Seguridad Social con destino a la dotación de la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad, cuya finalidad será la cancelación de los déficit que puedan generar las Mutuas en este ámbito de la gestión después de aplicada su Reserva de Estabilización por Cese de Actividad, así como la reposición de la misma al nivel mínimo obligatorio, en los términos establecidos en el artículo 74.4, sin perjuicio de ser de aplicación a la misma las previsiones establecidas en los párrafos quinto y sexto, del apartado 1 a), sobre materialización y disposiciones transitorias de los fondos.

- 5.

***Artículo 75 ter. Medidas cautelares y responsabilidad mancomunada.***

1. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá adoptar las medidas cautelares establecidas en el apartado 2 cuando la Mutua se halle en alguna de las siguientes situaciones:

- a) Cuando la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales no alcance el 80 por ciento de su cuantía mínima.

- b) Cuando concurren circunstancias de hecho, determinadas en virtud de comprobaciones de la Administración General del Estado, que muestren la existencia de desequilibrio económico-financiero en la Entidad, que, a su vez, ponga en peligro la solvencia o liquidez de la misma, los intereses de los asociados, de los beneficiarios y de la Seguridad Social o el cumplimiento de obligaciones contraídas. Asimismo, cuando aquellas comprobaciones determinen la insuficiencia o irregularidad de la contabilidad o de la administración, en términos que impidan conocer la situación real de la Mutua.

2. Las medidas cautelares que podrán adoptarse serán adecuadas y proporcionales en función de las características de la situación, y consistirán en:

- a) a) Requerir a la entidad para que en el plazo de un mes presente un plan de viabilidad, rehabilitación o saneamiento a corto o medio plazo, aprobado por su Junta Directiva, en el que se propongan las medidas adecuadas de carácter financiero, administrativo o de otro orden, formule previsión de los resultados y sus efectos, fijando asimismo los plazos para su ejecución, con la finalidad de superar la situación que dio origen a dicho requerimiento, garantizando en todo caso los derechos de los trabajadores protegidos y de la Seguridad Social.

La duración del plan no será superior a tres años, según las circunstancias, y concretará la forma y periodicidad de las actuaciones a realizar.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará o denegará el Plan propuesto en el plazo de un mes desde su presentación y, en su caso, fijará la periodicidad con la que la entidad deberá informar de su desarrollo.

- b) Convocar los Órganos de gobierno de la entidad, designando la persona que deba presidir la reunión y dar cuenta de la situación.
- c) Suspender en sus funciones a todos o algunos de los directivos de la entidad, debiendo esta designar las personas que, aceptadas previamente por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hayan de sustituirlos interinamente. Si la entidad no lo hiciera, podrá dicho Ministerio proceder a su designación.
- d) Ordenar la ejecución de medidas correctoras de las tendencias desfavorables registrada en su desarrollo económico y en el cumplimiento de sus fines sociales durante los últimos ejercicios analizados.
- e) intervenir la entidad para comprobar y garantizar el correcto cumplimiento de Órdenes concretas emanadas del citado Ministerio cuando, en otro caso, pudieran infringirse tales órdenes y de ello derivarse perjuicio mediato o inmediato para los trabajadores protegidos o la Seguridad Social.

3. Para adoptar las medidas cautelares previstas en el apartado anterior, se instruirá el correspondiente procedimiento administrativo con audiencia previa de la entidad interesada. Tales medidas cesarán por acuerdo del Ministerio de

Empleo y Seguridad Social cuando hayan desaparecido las causas que la motivaron.

Las medidas cautelares son independientes de las sanciones que legalmente procedan por los mismos hechos, y de la responsabilidad mancomunada regulada en el apartado 3.

4. La responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados a las Mutuas tendrá por objeto las siguientes obligaciones.

- a) La reposición de la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales hasta el nivel mínimo de cobertura, cuando la misma no alcance el 80 por ciento de su cuantía mínima, después de aplicarse las Reservas en la forma establecida en el artículo 75 y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social lo entienda necesario para garantizar la adecuada dispensación por la entidad de las prestaciones de la Seguridad Social o el cumplimiento de sus obligaciones.
- b) Los gastos indebidos por no corresponder a prestaciones, servicios u otros conceptos comprendidos en la colaboración en la gestión de la Seguridad Social.
- c) Los excesos en los gastos de administración y por sanciones económicas impuestas.
- d) Las retribuciones o indemnizaciones del personal al servicio de la Mutua por cuantía superior a la establecida en las normas que regulen la relación laboral de aplicación o por superar las limitaciones legalmente establecidas.
- e) La cancelación del déficit que resulte de la liquidación de la Mutua, por inexistencia de recursos suficientes una vez agotados los patrimonios en liquidación, incluido el patrimonio previsto en el artículo 70, apartado 2.
- f) Las obligaciones contraídas por la Mutua cuando la misma no las cumpla en la forma establecida legalmente.
- g) Las obligaciones atribuidas a la Mutua en virtud de la responsabilidad directa o subsidiaria, establecidas en el apartado 8 del artículo 71.

La responsabilidad mancomunada se extenderá hasta el pago de las obligaciones contraídas durante el periodo de tiempo en el que haya permanecido asociado el empresario o sean consecuencia de operaciones realizadas durante el mismo. En caso de cese en la asociación, la responsabilidad prescribirá a los cinco años del cierre del ejercicio en que finalizó aquella. Igualmente, la Mutua podrá hacer frente a esta responsabilidad mediante el patrimonio previsto en el artículo 70, apartado 4.

El sistema que se aplique para determinar las derramas salvaguardará la igualdad de los derechos y obligaciones de los empresarios asociados y será proporcional

al importe de las cuotas de la Seguridad Social que les corresponda satisfacer por las contingencias protegidas por la Mutua.

Las derramas tienen el carácter de recursos públicos de la Seguridad Social. La declaración de los créditos que resulten de la derrama y, en general, de la aplicación de la responsabilidad mancomunada se realizara por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, quién establecerá el importe liquido de los mismos, reclamara su pago y determinara la forma, los medios, modalidades y condiciones aplicables hasta su extinción, en los términos establecidos en el artículo 71.9.

### ***Artículo 76. Disolución y liquidación.***

Las Mutuas de la Seguridad Social cesaran en la colaboración en la gestión de la misma, produciéndose la disolución de la Entidad, en los supuestos siguientes:

- a) Acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria.
- b) Fusión o absorción de la Mutua.
- c) Ausencia de alguno de los requisitos exigidos para su constitución o funcionamiento.
- d) Acuerdo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por incumplimiento del Plan de viabilidad, rehabilitación o saneamiento previsto en el artículo 75 ter, apartado 2, dentro del plazo establecido en la resolución que apruebe el mismo.

En los supuestos anteriores y conforme al procedimiento que se regulara reglamentariamente, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social acordara la disolución de la Mutua, iniciándose seguidamente el proceso liquidatorio, cuyas operaciones y resultado requerirán la aprobación del mismo Ministerio. Los excedentes que resulten se ingresaran en la Tesorería General de la Seguridad Social para los fines del Sistema, excepto los que se obtengan de la liquidación del patrimonio histórico, que se aplicaran a los fines establecidos en los Estatutos una vez extinguidas las obligaciones de la Mutua.

Aprobada la liquidación, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social acordare el cese de la Entidad como Mutua en liquidación, ordenare la cancelación de su inscripción registral y publicará el acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.

En los supuestos de fusión y absorción no se iniciare proceso liquidatorio de las Mutuas integradas. La Mutua resultante de la fusión o la absorbente se subrogaren en los derechos y obligaciones de las que se extingan."

Dos. La disposición adicional undécima queda redactada en los siguientes términos:

*"Disposición adicional undécima. Gestión por las Mutuas de la Seguridad Social de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes o indiferenciadas.*

1. Las Mutuas de la Seguridad Social desarrollaran la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes o de contingencias indiferenciadas a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los trabajadores por cuenta propia adheridos, en los supuestos establecidos en los artículos 72.1, párrafo segundo, y 72.2, párrafo primero, de conformidad con las normas contenidas en el Capítulo IV del Título II, así como en sus disposiciones de aplicación y desarrollo, con las particularidades previstas en los Regímenes Especiales y Sistemas en que aquellos estuvieran encuadrados y en la presente disposición.

2. Corresponde a las Mutuas de la Seguridad Social la función de declaración del derecho a la prestación económica, así como las de denegación, suspensión, anulación y declaración de extinción del mismo, sin perjuicio del control sanitario de las altas y bajas médicas por parte de los servicios públicos de salud y de los efectos atribuidos a los partes médicos en esta Ley y en sus normas de desarrollo.

Los actos que se dicten en el ejercicio de las funciones mencionadas en el párrafo anterior serán motivados y se formalizarán por escrito, estando supeditada su eficacia a la notificación al beneficiario. Asimismo se notificarán al empresario en los supuestos en que el beneficiario mantenga relación laboral.

Recibido el parte médico de baja, la Mutua comprobará el cumplimiento por el beneficiario de los requisitos de afiliación, alta, periodo de carencia y restantes exigidos en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente y determinará el importe del subsidio, adoptando el acuerdo de declaración inicial del derecho a la prestación.

Durante el plazo de dos meses siguientes a la liquidación y pago del subsidio, los pagos que se realicen tendrán carácter provisional, pudiendo las Entidades regularizar los pagos provisionales, que adquirirán el carácter de definitivos cuando transcurra el mencionado plazo de dos meses.

3. Cuando las Mutuas de la Seguridad Social, con base en el contenido de los partes médicos y de los informes emitidos en el proceso, así como a través de la información obtenida de las actuaciones de control y seguimiento o de las asistencias sanitarias previstas en el apartado 6, consideren que el beneficiario podría no estar impedido para el trabajo, podrán formular propuestas motivadas de alta médica a través de los médicos dependientes de las mismas, dirigidas al facultativo del servicio público que emitió los partes médicos, por medio de la Inspección médica de los Servicios Públicos de Salud. La Inspección médica

dispondrá de un plazo de cinco días desde la recepción de la propuesta para comunicar a la Mutua la estimación de la misma, trasladándole el correspondiente parte medico de alta, o para denegarla, trasladándole el parte de confirmación de baja junto con informe motivado que lo justifique. Se considerara estimada la propuesta y emitido parte medico de alta, si en el mencionado plazo de cinco días no se notifica a la Mutua el parte de confirmación de la situación de baja, en cuyo caso la mutua adoptara acuerdo de extinción del derecho en la forma establecida en el apartado 2 y lo notificara al trabajador y a la empresa, consignando la fecha de efectos del mismo, que se corresponderá con el primer día hábil siguiente a su notificación al trabajador.

Los acuerdos de extinción del derecho que adopten las Mutuas con arreglo al procedimiento establecido en el párrafo anterior, podrán ser impugnados por el trabajador afectado ante la Inspección médica adscrita al Instituto Nacional de la Seguridad Social, en los términos que se establezcan. Igualmente las Mutuas podrán solicitar al INSS la emisión del parte de alta en el supuesto de que en el procedimiento de propuesta de alta fuera emitido parte de confirmación de baja, de acuerdo con las atribuciones conferidas a la Entidad Gestora en la disposición adicional quincuagésimo segunda.

4. Las comunicaciones que se realicen entre los médicos de las Mutuas, los pertenecientes al Servicio Público de Salud y las Entidades Gestoras se realizarán preferentemente por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, siendo válidas y eficaces desde el momento en que se reciban en el centro donde aquéllos desarrollen sus funciones.

Igualmente comunicarán al Ministerio de Empleo y Seguridad Social las incidencias que se produzcan en sus relaciones con el servicio público de salud o cuando la empresa incumpla sus obligaciones, quién adoptará, en su caso, las medidas que correspondan.

Las Mutuas no podrán desarrollar las funciones de gestión de la prestación a través de medios concertados, sin perjuicio de recabar, en su caso, los servicios de los Centros sanitarios autorizados para realizar pruebas diagnósticas o tratamientos terapéuticos y rehabilitadores que las mismas soliciten.

5. Son actos de control y seguimiento de la prestación económica, aquellos dirigidos a comprobar la concurrencia de los hechos que originan la situación de necesidad y de los requisitos que condicionan el nacimiento o mantenimiento del derecho, así como los exámenes y reconocimientos médicos. Las Mutuas de la Seguridad Social podrán realizar los mencionados actos a partir del día de la baja médica y, respecto de las citaciones para examen o reconocimiento médico, la incomparecencia injustificada del beneficiario será causa de extinción del derecho a la prestación económica, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 bis, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Asimismo las Mutuas de la Seguridad Social podrán realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, con la finalidad de evitar la

prolongación innecesaria de los procesos previstos en esta disposición, previa autorización del médico del servicio público de salud y consentimiento informado del paciente. Los tratamientos terapéuticos y rehabilitadores se realizarán en los Centros asistenciales adscritos a la gestión de las contingencias profesionales, en el margen que permita su aprovechamiento, utilizando los medios destinados a la asistencia de patologías de origen profesional. En ningún caso las pruebas y tratamientos supondrán la asunción de la prestación de asistencia sanitaria derivada de contingencias comunes ni dará lugar a la dotación de recursos destinados a esta última.

Las Mutuas de la Seguridad Social podrán celebrar convenios y acuerdos con las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y con los Servicios Públicos de Salud, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para la realización en sus Centros asistenciales adscritos de reconocimientos médicos, pruebas diagnósticas, informes, tratamientos sanitarios y rehabilitadores, incluidas intervenciones quirúrgicas, que aquellas les soliciten, siendo de aplicación las condiciones establecidas en el párrafo anterior. Los Convenios y Acuerdos autorizados fijaran las compensaciones económicas que hayan de satisfacerse como compensación a la Mutua por los servicios dispensados, así como la forma y condiciones de pago.

Con carácter subsidiario respecto de los convenios y acuerdos previstos en el párrafo anterior, siempre que los Centros asistenciales adscritos dispongan de un margen de aprovechamiento que lo permita, las Mutuas de la Seguridad Social podrán celebrar conciertos con entidades privadas, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para la realización de las pruebas y los tratamientos señalados a favor de las personas que aquellos les soliciten, los cuales se supeditaran a que las actuaciones que se establezcan no perjudiquen los servicios a que los Centros están destinados, ni perturben la debida atención a los trabajadores protegidos ni a los que remitan las entidades públicas, ni minoren los niveles de calidad establecidos para los mismos, siendo asimismo de aplicación las limitaciones y condiciones establecidas en este apartado relativas a los medios que se pueden emplear.

Los derechos de créditos que generen los convenios, acuerdos y conciertos son recursos públicos de la Seguridad Social, siendo de aplicación a los mismos lo dispuesto en el artículo 70.2."

***Disposición adicional Única. Denominación de las Mutuas de la Seguridad Social.***

Todas las referencias a Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social realizadas en las normas legales y reglamentarias, se entenderán hechas a las Mutuas de la Seguridad Social.

***Disposición transitoria primera. Aplicación de los plazos de vigencia de los convenios de asociación y de los documentos de adhesión.***

La aplicación del plazo de vigencia establecido en el apartado 1 del artículo 72 a los convenios de asociación formalizados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, se realizará computando, como periodo de tiempo consumido, el que haya transcurrido hasta el último día de los dos meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. No obstante, los convenios de asociación que conforme al cómputo anterior superen el plazo de vigencia establecido en el artículo 72.1, finalizarán el último día del segundo mes siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley.

Respecto de los documentos de adhesión, el plazo de vigencia previsto en el apartado 2 del artículo 72 se computará deduciendo el periodo de tiempo consumido hasta la entrada en vigor de esta Ley. En el caso de que, conforme a esta forma de cómputo, los documentos hayan vencido con anterioridad al día 1 de enero del siguiente año al de la entrada en vigor, los trabajadores autónomos afectados dispondrán de un plazo de tres meses a partir de la misma para solicitar el cambio de Mutua, que producirá sus efectos a partir del 1 de enero del siguiente año.

***Disposición transitoria segunda. Regularización de las Reservas de Estabilización.***

Lo dispuesto en el artículo 75.2 respecto al régimen de dotación de las Reservas de Estabilización de Contingencias Profesionales, de Contingencias Comunes y por Cese de Actividad, será de aplicación a la liquidación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2013. A tal efecto las Mutuas de la Seguridad Social aplicarán los excesos que, en su caso, resulten sobre los límites establecidos a los Fondos y a la Reserva previstos en el artículo 75 bis, e ingresarán en la Tesorería General de la Seguridad Social, con anterioridad al 31 de julio de 2014, las cantidades destinadas a aquellos, con destino a los fines establecidos en el artículo mencionado.

***Disposición transitoria tercera. Régimen de desinversión de las Mutuas de la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención.***

1. Las Mutuas de la Seguridad Social que al amparo de la disposición final sexta de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, hubiesen aportado capital de su patrimonio histórico en las sociedades mercantiles de prevención constituidas por las mismas, deberán enajenar la totalidad de sus participaciones con anterioridad al 31 de diciembre de 2014.

El proceso de venta se iniciara previa determinación de los bienes, derechos y obligaciones de las Sociedades constituidas y su valoración, a la que deberá

prestar su conformidad el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al objeto de que no se generen perjuicios a los derechos, bienes o intereses de la Seguridad Social.

2. Finalizado el plazo establecido, las sociedades que no hubieran enajenado el cien por cien de sus participaciones entrarán en causa de disolución. Durante el mes de enero de 2014 la Mutua trasladará al Ministerio de Empleo y Seguridad Social el acuerdo de disolución debidamente inscrito en el Registro Mercantil, junto con los documentos que requiera el Departamento, y le dará cuenta de las actuaciones desarrolladas y previstas para la liquidación de la sociedad y el plazo estimado para finalizar el proceso liquidatorio, resultados previstos y aplicaciones. Asimismo la Mutua aportará en su momento al Ministerio de Empleo y Seguridad Social los documentos definitivos que acrediten la liquidación de la sociedad.

3. Durante el periodo de tiempo que medie hasta la total desinversión, las Mutuas de la Seguridad Social no podrán celebrar contratos con la sociedad de prevención propia ni de otra Mutua, ni realizar aportaciones a las mismas o contraer obligaciones a favor o en beneficio de aquellas, excepto autorización expresa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

***Disposición transitoria cuarta. Integración del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social.***

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, la Tesorería General de la Seguridad Social integrara en el Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social previsto en el artículo 75 bis, apartado 1 a), la totalidad del metálico, saldo, valores y demás bienes muebles o inmuebles existentes en el Fondo de Prevención y Rehabilitación o resultantes de las inversiones procedentes de sus fondos, el cual quedará extinguido.

***Disposición derogatoria única. Derogación normativa.***

Quedan derogados la disposición adicional decimocuarta de la Ley 2712011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social; el artículo 2 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad, pasando los artículos 3 al 19 a numerarse como artículos 2 al 18; el artículo 44 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.

***Disposición final primera. Título competencia***

La presente Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.17<sup>a</sup> de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.

***Disposición final segunda. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.***

El artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, queda modificado en los siguientes términos:

*"Artículo 32. Prohibición de participación en actividades mercantiles de prevención.*

Las Mutuas de la Seguridad Social no podrán desarrollar las funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos, ni participar con cargo a su patrimonio histórico en el capital social de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure la actividad de prevención."

***Disposición final tercera. Modificación de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.***

Uno. El artículo 1 queda redactado del siguiente modo:

*"Artículo 1. Definición y ámbito de aplicación.*

1. El sistema específico de protección por el cese de actividad tiene por objeto dispensar a los trabajadores autónomos, afiliados a la Seguridad Social y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, que voluntariamente protejan la contingencia, las prestaciones y medidas establecidas en esta Ley ante la situación de cese total en la actividad que originó el alta en el Régimen Especial, no obstante poder y querer ejercer una actividad económica o profesional a título lucrativo.

La protección por cese de actividad forma parte de la acción protectora del Sistema de la Seguridad Social y se rige por lo dispuesto en esta Ley y en sus normas de desarrollo, así como, supletoriamente, por las normas que regulan el Régimen Especial de la Seguridad Social de encuadramiento.

2. El cese de actividad podrá ser definitivo o temporal. El cese temporal comporta la interrupción de todas las actividades que originaron el alta en el Régimen Especial en el que el trabajador autónomo figure encuadrado, en los

supuestos regulados en el artículo 4.

3. El régimen de protección de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, se regirá por lo dispuesto en la disposición adicional octava."

Dos. La letra a) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 3, que pasa a numerarse como artículo 2, quedan redactados del siguiente modo:

*"Artículo 2. Acción protectora.*

1. El sistema de protección por cese de actividad comprende las prestaciones siguientes:

a) La prestación económica por cese total, temporal o definitivo, de la actividad."

2. El sistema de protección por cese de actividad comprenderá, además, medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios del mismo, cuya gestión corresponderá a las entidades previstas en el artículo 15."

Tres. Las letras a) y e) del apartado 1 del artículo 4, que pasa a numerarse como artículo 3, quedan redactadas del siguiente modo:

"a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Espacial de los Trabajadores del Mar, en su caso."

"e) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el Órgano gestor invitare al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección."

Cuatro. Se da una nueva redacción a las letras a), c) y e) del apartado 1, el apartado 2, apartado 3 y apartado 4 del artículo 5, que pasa a numerarse como artículo 4, quedando redactado del siguiente modo:

*"Artículo 4. Situación legal de cese de actividad.*

1. Se encontraran en situación legal de cese de actividad todos aquellos trabajadores autónomos que cesen en el ejercicio de su actividad por alguna de las causas siguientes:

a) Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u

organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional.

En caso de establecimiento abierto al público se exigirá el cierre del mismo durante la percepción del subsidio o bien su transmisión a terceros. No obstante, el autónomo titular del inmueble donde se ubica el establecimiento podrá realizar sobre el mismo los actos de disposición o disfrute que correspondan a su derecho, siempre que no supongan la continuidad del autónomo en la actividad económica o profesional finalizada.

Se entenderá que existen motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos cuando concorra alguna de las circunstancias siguientes:

1.º Pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad que determinen un resultado negativo neto en las cuentas de cierre del ejercicio o bien al momento de cese de la actividad. A tal efecto se computarán los ingresos y gastos de un año completo, excluido el primer año de inicio de la actividad.

2.º Ejecuciones judiciales o administrativas tendentes al cobro de las deudas reconocidas por los órganos ejecutivos, que comporten al menos el 30 por ciento de los ingresos del ejercicio económico inmediatamente anterior.

3.º La declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad, en los términos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal".

"c) Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional y no venga motivada por la comisión de infracciones penales".

"e) Los familiares que ejerzan funciones de ayuda familiar en el negocio que hayan cesado involuntariamente por concurrir alguno de los supuestos previstos en los apartados a), b), c) o d), así como el cónyuge que ejercía esas funciones y que a consecuencia del divorcio o separación de su titular finalice las mismas, en cuyo caso la situación de cese estará constituida por la resolución judicial que establezca la separación o el divorcio".

2. La situación legal de cese de la actividad respecto de los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por aplicación de la disposición adicional 27ª de la Ley General de la Seguridad Social, se producirá cuando cesen involuntariamente en el cargo de consejero o administrador de la sociedad o en la prestación de servicios a la misma y, en todo caso, finalice la actividad personal y retribuida que origina el alta.

Asimismo concurrirá la situación cuando el trabajador autónomo cese en la actividad por incurrir la sociedad en alguno de los supuestos previstos en el apartado 1.

3. Se incorpora a este apartado el párrafo primero y epígrafes a) al e) del anterior apartado 2, y se añade un párrafo segundo, con la siguiente redacción:

La situación legal de cese de actividad establecida en este apartado será también de aplicación a los trabajadores autónomos que carezcan del reconocimiento de económicamente dependientes, siempre que su actividad cumpla las condiciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 20/2011, de 11 de julio, por la que se aprueba el Estatuto del Trabajo Autónomo, excepto la correspondiente al nivel de ingresos procedentes del mismo cliente, que, a efectos del sistema de protección objeto de esta Ley, será de al menos el 85 por ciento de sus rendimientos por trabajo o actividades económicas o profesionales. Este porcentaje se aplicará de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo.

4. Se incorpora a este apartado el apartado 3 y sus epígrafes a) y b), pasando el último a tener la siguiente redacción:

En ningún caso se considerará en situación legal de cese de actividad:

b) A los trabajadores autónomos previstos en el apartado 3 que tras cesar su relación con el cliente y percibir la prestación por cese de actividad, vuelvan a contratar con el mismo cliente en el plazo de un año, a contar desde el momento en que se extinguió la prestación, en cuyo caso deberán reintegrar la prestación recibida.

Cinco. Se da una nueva redacción a las letras a), b) y f) del apartado 1, pasando los epígrafes b), c) y d) a ser epígrafes c), d) y e), así como al apartado 2 del artículo 6, que pasa a numerarse como artículo 5, que quedan redactados del siguiente modo:

“1. Las situaciones legales de cese de actividad de los trabajadores autónomos se acreditarán mediante declaración jurada del solicitante, en la que se consignará el motivo o motivos concurrentes y la fecha de efectos del cese, a la que acompañará los documentos que seguidamente se establecen, sin perjuicio de aportarse, si aquél lo estima conveniente, cualquier medio de prueba admitido legalmente.

a) Los motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos se acrediten mediante los documentos contables, profesionales, fiscales, administrativos o judiciales que justifiquen la falta de viabilidad de la actividad.

En todo caso se deberán aportar los documentos que justifiquen el cierre del establecimiento en los términos establecidos en el artículo 4.1 a), la baja en el censo de actividades económicas y la baja en el Régimen Especial de la Seguridad Social en el que estuviera encuadrado el solicitante. En el caso de que la actividad requiriera el otorgamiento de autorizaciones o licencias administrativas, se acompañará la comunicación de solicitud de baja

correspondiente y, en su caso, la concesión de la misma, o bien el acuerdo de retirada de la misma.

Sin perjuicio de los documentos señalados en el párrafo anterior, la concurrencia de motivos económicos se considerare acreditada mediante la documentación contable que confeccione el trabajador autónomo, en la que se registre la existencia de resultado neto negativo al cierre del ejercicio o del cese de la actividad en los términos del artículo 4, apartado 1 a), 1º, así como mediante las declaraciones del IVA, del IRPF y demás documentos preceptivos que, a su vez, justifiquen las partidas correspondientes consignadas en las cuentas de cierre. En todo caso, las partidas que se consignen corresponderán a conceptos admitidos en las normas que regulan la contabilidad.

El trabajador autónomo podrá formular su solicitud aportando datos estimados de cierre, al objeto de agilizar la instrucción del procedimiento, e incorporar los definitivos con carácter previo al dictado de la resolución.

- b) El cese de actividad de los socios de las entidades capitalistas se acreditara mediante el acuerdo adoptado en junta, por el que se disponga el cese en el cargo de administrador o consejero o bien el cese en la prestación de servicios, así como, en su caso, mediante certificado emitido por el Registro Mercantil que acredite la inscripción del acuerdo.

La concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos en la sociedad que hagan inviable su continuidad se acreditare mediante el acuerdo de disolución adoptado en Junta General, así como mediante los documentos establecidos en el epígrafe anterior que justifiquen la situación. Los motivos económicos requerirán la aportación adicional de las cuentas de cierre, en los términos del artículo 4.1 a), 1ª.

- f) El cese de los trabajadores autónomos que ejerzan funciones de ayuda familiar se acreditare mediante declaración jurada del titular de la empresa que exprese el cese y separación involuntarios del autónomo, su causa y la fecha de efectos así como, en su caso, mediante los documentos fiscales o administrativos que justifiquen la modificación de la situación de dependencia, así como la baja en el Régimen Especial de la Seguridad Social. En caso de que se alegue el cese del negocio o la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, serán prueba suficiente los documentos establecidos en el epígrafe a).

El divorcio o la separación matrimonial se acreditaran mediante la correspondiente resolución judicial, así como la documentación que justifique la perdida de las funciones de ayuda familiar directa en el negocio que el solicitante venia realizando con anterioridad a la ruptura o a la separación matrimonial."

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1 del presente artículo, las situaciones legales de cese de actividad de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como de los mencionados en el artículo 4.3, se acreditarán a través de los siguientes medios:

Seis. El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 7, que pasa a numerarse como artículo 6, queda redactado del siguiente modo:

"Respecto de los trabajadores por cuenta propia que no se encuentren adheridos a una Mutua, será de aplicación lo establecido en la disposición adicional cuarta."

Siete. Los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 pasar a numerarse como los artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12, respectivamente.

Ocho. El apartado 1 del artículo 14, que pasa a numerarse como artículo 13, queda redactado del siguiente modo:

"1. La protección por cese de actividad se financiara exclusivamente con cargo a la cotización por dicha contingencia. La fecha de efectos de la cobertura comenzara a partir del primer día del mismo mes en que sea formalizada."

Nueve. El artículo 15 pasa a numerarse como artículo 14 y el artículo 16, que pasa a numerarse como artículo 15, queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 15. *Órgano gestor.*

1. Salvo lo establecido en el artículo anterior y en la disposición adicional cuarta, corresponde a las Mutuas de la Seguridad Social la gestión de las funciones y servicios derivados de la protección por cese de actividad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.2, así como de las competencias atribuidas a los Órganos competentes en materia de sanciones por infracciones en el orden social, y que de las competencias de dirección y tutela atribuidas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el artículo 73.1 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo /1994, de 20 de junio.

A tal fin, la gestión de la prestación por cese de actividad corresponderá a la Mutua con quien el trabajador autónomo haya formalizado el Documento de Adhesión, mediante la suscripción del Anexo correspondiente. El procedimiento de formalización de la protección por cese de actividad, su periodo de vigencia y efectos se regirá por las normas de aplicación a la colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social.

2. El resultado positivo anual que las Mutuas obtengan de la gestión del sistema de protección se destinara a la constitución de una Reserva de Estabilización por Cese de Actividad, cuyo nivel mínima de dotación equivaldrá al 5 por ciento de las cuotas ingresadas durante el ejercicio por esta contingencia, que podrá incrementarse voluntariamente hasta alcanzar el 25 por ciento de las mismas cuotas, que constituirá el nivel máxima de dotación, y cuya finalidad será el atender los posibles resultados negativos futuros que se produzcan en esta gestión.

Una vez dotada con cargo al cierre del ejercicio la Reserva de Estabilización en los términos establecidos, el excedente se ingresare en la Tesorería General de la Seguridad Social, con destino a la dotación de una Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad, cuya finalidad será asimismo la cancelación de los déficit que puedan generar las Mutuas después de aplicada su reserva de cese de actividad, y la reposición de la misma hasta el nivel mínimo señalado, en los términos que establezca el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En ningún caso será de aplicación el sistema de responsabilidad mancomunada establecido para los empresarios asociados."

Diez. La letra c) del apartado uno de la disposición adicional séptima, queda redactada del siguiente modo:

"c) Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional y no venga motivada por la comisión de infracciones penales."

***Disposición final cuarta. Habilitación al Gobierno.***

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente ley.

***Disposición final quinta. Entrada en vigor.***

La presente ley entrare en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".